



SALA UNIPERSONAL DE DECISIÓN CIVIL

PROCESO	Ejecutivo con garantía real
DEMANDANTE	Departamento de Antioquia – Fondo de la Vivienda
DEMANDADO	Claudia Lucina Soto Sánchez
RADICADO	05001 31 03 021 2023 00223 01
DECISIÓN	Confirma auto apelado

Medellín, dos de noviembre de dos mil veintitrés

El Despacho resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en el asunto de la referencia.

ANTECEDENTES

1.1. En providencia de 9 de agosto de 2023 el Juzgado 021 Civil del Circuito de Medellín rechazó la demanda planteada por el Departamento de Antioquia – Fondo de la Vivienda. Como fundamento de lo anterior, el juez tuvo en consideración que en auto de 30 de junio del presente año se requirió a la parte ejecutante para que, so pena del rechazo la demanda, informara de dónde surgía la suma de \$37 750 286 pretendida por concepto de intereses de plazo, y a su vez aportara de forma clara y discriminada la liquidación que arrojó dicha cifra.

En virtud de lo anterior, el apoderado de la demandante explicó que la ejecutada adeudaba 96 cuotas quincenales, cada una por \$496 084, es decir, 48 cuotas mensuales de \$992 168 cada una, o sea que sobre esos saldos se cobraba el interés mensual al máximo permitido, operación de la cual surgió el monto de los intereses de plazo causados y no pagados, sin embargo, no aportó la liquidación pedida.

En este orden de ideas, el despacho determinó que tal explicación no ofreció claridad alguna, en tanto, pasó por alto lo establecido en la Escritura Pública No. 531 de 13 de marzo de 2018, la cual en la cláusula tercera de la

constitución de la hipoteca previó que en cuanto a las cuotas quincenales pactadas en \$496 084 estas "*...comprenden la amortización del capital, primas de seguros e intereses...*", lo que refleja que la totalidad de la cuota incluía también los intereses y primas de seguros, por lo tanto, la misma constituía amortización del capital y solo sobre esa porción contenida en cada cuota y a partir del incumplimiento en el pago de la misma, resultaba admisible el cobro de intereses moratorios pactados. En este sentido, aceptar el cobro de intereses moratorios sobre la totalidad de la cuota como lo expuso el apoderado, implicaría que también se cobrase sobre las primas de seguros cuyo pago no se acreditó por la acreedora para subrogarse en el cobro, y además sobre intereses causados, lo que configuraría la figura del anatocismo, prohibido en la legislación.

Así las cosas, al no aportarse la liquidación requerida que brindara claridad respecto sobre cuál parte de la cuota se podía cobrar intereses, al despacho le quedaba en duda en primer lugar, si es competente para conocer del asunto y en caso de superar ese examen, también habría duda sobre el mandamiento de pago en la forma descrita en el artículo 430 del C.G.P.

1.2. Inconforme con tal decisión, el apoderado judicial del Departamento de Antioquia interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación, con el fin de que lo resuelto fuera revocado y en su lugar se admitiera la demanda. Para tal fin, sostuvo que al momento de subsanar la demanda explicó que la cifra pretendida comprendía los intereses de plazo causados y no pagados, liquidados, a la tasa máxima permitida por la ley. Intereses que estaban estipulados en la cláusula tercera del título hipotecario y que rezaba que inicialmente el interés de plazo era del 4% anual sobre los saldos y en caso de mora, se pagaría la tasa máxima establecida en la ley.

Adujo que con la demanda allegó los documentos necesarios para librar mandamiento de pago, si las obligaciones demandadas no son las correctas o se está cobrando más, ello puede ser excepcionado por la ejecutada. También apuntó que, si el despacho consideraba que el monto de intereses de plazo que se pretendía cobrar era excesivo y por ello no era competente, debía declarar la falta de competencia y remitir el proceso a los juzgados civiles municipales.

1.3. En proveído de 11 de septiembre del año en curso, el juzgado de primer nivel resolvió el recurso de reposición de manera desfavorable, por lo que mantuvo incólume la decisión y concedió la alzada.

Las razones de lo resuelto se centraron en que el proceso ejecutivo exige el aporte de un documento que brinde certeza al juez respecto del cumplimiento de los requisitos del artículo 422 del C.G.P., por lo que no es posible que se presente alguna duda o ambigüedad en relación con la claridad, expresividad o exigibilidad de la obligación. Por ello, definió que no era de recibo para el juzgado lo expresado por el recurrente, en torno a que *"si las obligaciones demandadas no son las correctas o se está cobrando por demás, ello puede ser excepcionado por la demandada una vez notificada"*, pues en caso de encontrarse alguna irregularidad en tal sentido, era deber del fallador sanear lo pertinente desde el inicio del procedimiento, máxime cuando se trata de la ejecución de obligaciones que, constituyen créditos adquiridos para la adquisición de vivienda, pues en esos eventos el juez debe procurar que se cumplan los requisitos legalmente previstos para el cobro de los intereses en este tipo de acreencias.

Explicó que el requerimiento efectuado a la parte ejecutante buscaba brindar claridad respecto de la suma pretendida por concepto de intereses de plazo, pues el documento aportado para el cobro, no era claro en ese sentido, pues si cada una de las cuotas que debía ser pagada, comprendía una porción de capital, otra porción destinada al pago de primas de seguros y otra porción con destino al pago de intereses de plazo, era lógico que para acudir la jurisdicción con miras al cumplimiento forzoso de la obligación, debía quedar patente cuánto de esa cuota representaba cada concepto, en atención a que únicamente sobre la porción que representaba capital y a partir del incumplimiento, resultaba admisible el cobro de los intereses moratorios pactados, además, la liquidación solicitada habría arrojado respecto de si la sumatoria de las porciones que en cada cuota representaban intereses de plazo, sumaban la suma pedida por dicho concepto correspondiendo o no a lo pactado.

CONSIDERACIONES

2.1. El numeral 4 del artículo 82 del Código General del Proceso prevé que es requisito de la demanda lo siguiente:

"ARTÍCULO 82. REQUISITOS DE LA DEMANDA. Salvo disposición en contrario, la demanda con que se promueva todo proceso deberá reunir los siguientes requisitos:

...

4. Lo que se pretenda, expresado con precisión y claridad.

...".

2.2. Por su parte, el artículo 90 del estatuto procesal establece las causales de admisión, inadmisión y rechazo. Al respecto, la norma en cita señala:

"ARTÍCULO 90. ADMISIÓN, INADMISIÓN Y RECHAZO DE LA DEMANDA. El juez admitirá la demanda que reúna los requisitos de ley, y le dará el trámite que legalmente le corresponda aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada. En la misma providencia el juez deberá integrar el litisconsorcio necesario y ordenarle al demandado que aporte, durante el traslado de la demanda, los documentos que estén en su poder y que hayan sido solicitados por el demandante.

El juez rechazará la demanda cuando carezca de jurisdicción o de competencia o cuando esté vencido el término de caducidad para instaurarla. En los dos primeros casos ordenará enviarla con sus anexos al que considere competente; en el último, ordenará devolver los anexos sin necesidad de desglose.

Mediante auto no susceptible de recursos el juez declarará inadmisibile la demanda solo en los siguientes casos:

1. Cuando no reúna los requisitos formales.

...".

2.3. En relación con la claridad de las pretensiones en el proceso ejecutivo, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en Sentencia STC9802 de 2019 precisó:

Preliminarmente, la colegiatura reseñó los argumentos de la apelante que alegó que se estaba «ejecutando un título complejo conformado por las facturas y contrato de obra, y que ello debe ser así, para determinar cómo los capitales que corresponden a las sumas retenidas en garantía solo se hace exigibles con la entrega de los trabajos terminados a satisfacción, condición que fue cumplida en mayo 30 de 2018; [y] que en el escrito subsanatorio, se individualizó cada una de las facturas con sus correspondientes datos [además] exigir el pago desde la fecha de exigibilidad de cada factura, constituiría un cobro de lo no debido».

Luego, para resolver precisó:

«Teniendo en cuenta que desde el escrito de demanda (que fue inadmitida) se señaló que se cobraba el importe de 23 facturas, más los respectivos intereses de mora, se estima adecuado, razonable, y proporcionado, que el juez de primer grado en aplicación del inciso 40 del artículo 82 del Código General del Proceso hubiere requerido a la ejecutante que precisara, discriminara, el capital de cada instrumento».

Seguidamente, indicó:

«A pesar del defecto señalado en el auto inadmisorio en el que se descalificó que se hubiere pedido un capital global sin discriminar lo atinente a cada factura; en el escrito de subsanada de la demanda las pretensiones permanecieron iguales y no se distinguió cuál era el capital y vencimiento de cada instrumento».

Así las cosas, coligió que:

«(...) no hay más camino que confirmar la decisión de primer grado, pues (...) la parte demandante no acató el mandato por el cual debía discriminar lo pretendido, para cada una de las 23 facturas».

Finalmente, al concluir comentó que:

«(...) si bien la apelante asegura que lo perseguido se soporta en un título ejecutivo complejo (compuesto por un contrato de obra y las facturas); la verdad, es que según las pretensiones de la demanda, expresamente se pidió el cobro, únicamente, de las 23 facturas y no del acuerdo referido.

Así que debe insistirse, en que es totalmente razonable y proporcionado, que se solicitara al ejecutante discriminar lo perseguido para cada uno de los instrumentos; no obstante ello no ocurrió.

(...)

De lo anterior, se observa que la magistrada accionada motivó la providencia en el examen que realizó del expediente, lo que armonizó con lo dispuesto por el legislador en la materia con el numeral 4º del artículo 82 del Código General del Proceso, cuyo resultado fue confirmar el proveído recurrido, en el sentido de encontrar válido el rechazo del libelo ante la falta de claridad y precisión en las pretensiones formuladas, sin que de tal proceder pueda predicarse o atribuírsele la vía de hecho denunciada.

En un asunto de tutela donde se suscitó similar discusión, esta Corporación encontró sensata la postura del superior al resolver en igual sentido porque el demandante no cumplió con la carga impuesta de cara a subsanar el escrito introductorio:

«En suma, la autoridad cuestionada validó la determinación del a-quo, al hallar razonable el requerimiento que hizo (...), toda vez que «admitir la demanda sin ajustarse al ordenamiento jurídico, eventualmente comportaría una responsabilidad al juez que así proceda» además,

obrar en forma contraria sería incurrir en un yerro mayor, comoquiera que se estaría permitiendo el ingreso de una «demanda» al aparato judicial sin el lleno de los requisitos». (CSJ STC7212-2015, 9 jun. 2015, rad. 01156-00).

CASO EN CONCRETO

En el caso bajo examen, el recurso formulado plantea resolver si el juez de primer grado tuvo razón al rechazar la demanda, debido a que, lo pretendido por la parte demandante no se acompasa con lo establecido en el documento presentado para el cobro, pues no hay certeza sobre el valor exacto que de la cuota constituía amortización al capital, pues solo sobre ese valor y a partir del incumplimiento en el pago del mismo, resultaría admisible el cobro de los intereses moratorios. Por lo tanto, aceptar el cobro de intereses de mora sobre la totalidad de la cuota, implicaría que sobre las primas de seguros y sobre los intereses causados, se estuviese cobrando los intereses de mora.

Dicho lo anterior, esta dependencia judicial considera que lo definido por el fallador de primera instancia se encuentra ajustado a derecho, toda vez que, le asiste razón al concluir que no existe claridad en las pretensiones formuladas, concretamente en la pretensión segunda, la cual busca el pago de una suma equivalente a \$37 750 286, por concepto de intereses de plazo causados y no pagados desde el 15 de junio de 2019 hasta la presentación de la demanda (13 de junio de 2023). En este orden de ideas, analizada la Escritura Pública No. 531 de 13 de marzo de 2018, en el acápite de constitución de hipoteca, en la cláusula tercera se consignó "*La suma prestada la pagarán EL BENEFICIARIO en un término hasta de DIECINUEVE AÑOS Y ONCE MESES Y MEDIO mediante cuotas QUINCENALES de amortización que será de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS (\$496.084) cada una, la primera cuota la pagará a partir del 31 de marzo de 2018 hasta completar la totalidad de la deuda. **Las cuotas señaladas comprenden la amortización del capital, primas de seguros e intereses**, estos serán del CUATRO POR CIENTO (4%) anual, sobre saldos, los cuales deberá ajustarse cada año con base en el IPC...*" (Subraya intencional).

Debido a lo anterior, el juzgado de instancia en auto de 30 de junio de 2023 requirió al extremo procesal demandante para que aportara la liquidación que arrojó la suma de \$37 750 286 que se pretende por concepto de intereses de plazo, sin embargo, en el escrito de subsanación, el apoderado judicial de la demandante se limitó a señalar *"La señora Soto Sánchez se encuentra en mora en el pago del plan de pagos desde el día 15 de junio de 2019, es decir se encuentra en mora en el pago del plan en 96 cuotas quincenales, lo que equivale a decir que adeuda 48 cuotas mensuales cada una por un valor de \$992.168,00. Sobre estos saldos sin pagar de las cuotas mensuales se cobra un interés mensual al máximo permitido por la ley es decir, el estipulado por el artículo 884 del Código de Comercio, modificado por el artículo 111 de la Ley 510 de 1.999. De esta operación surge el monto de los intereses de plazo causados y no pagados"*.

De allí que la pretensión dirigida al pago de \$37 750 286, por concepto de intereses de plazo causados y no pagados es confusa, ello en atención a lo dispuesto en la Escritura Pública No. 531 de 13 de marzo de 2019, porque, como se indicó en párrafos anteriores, la cuota quincenal por valor de \$496 084 comprendía la amortización del capital, las primas de seguros e intereses, por lo tanto, era carga de la accionante precisar el valor exacto que comprendía la amortización al capital, puesto que se requería y era necesario segregar el valor de las primas de seguros y los intereses, sobre todo porque no hay elemento material probatorio que demuestre que el Departamento de Antioquia se subrogó en el pago de las primas de seguros, y como el juzgador de primer grado bien lo determinó, no se puede ordenar el pago de intereses sobre los intereses, lo cual está proscrito en el ordenamiento jurídico. Por consiguiente, pese a que se brindó la oportunidad al Departamento de Antioquia de brindar certeza sobre la manera en que, el valor por concepto de intereses de plazo cobrados, surgió, ello no fue clarificado por este, así que la falta de claridad en las pretensiones de la demanda persistió.

Finalmente, es de indicar que no están llamados a prosperar los argumentos planteados por la parte recurrente tendientes a afirmar que, en caso de cobrarse un valor excesivo, ello podía ser objeto de excepción por la demandada, y que de considerarse la falta de competencia, el despacho debía

remitir el expediente a los juzgados civiles municipales, porque de acuerdo con el numeral 4 del artículo 82 del C.G.P. se exige que las pretensiones se expresen con precisión y claridad, y en este caso en particular no hay certeza sobre el valor que se pretende por concepto de intereses de plazo.

En consecuencia, el auto de 9 de agosto de 2023 proferido por el Juzgado 021 Civil del Circuito de Medellín, será confirmado.

Por lo expuesto, el Despacho RESUELVE:

PRIMERO. CONFIRMAR la decisión adoptada en auto de 9 de agosto de 2023, por el Juzgado 021 Civil del Circuito de Medellín.

SEGUNDO. Sin condena en costas porque estas no se causaron.

NOTIFÍQUESE



MARTHA CECILIA LEMA VILLADA
Magistrada